

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020).

**Auto Interlocutorio Nro. 106**

**MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**

<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	Recurso de insistencia
<b>EXPEDIENTE:</b>	76001-23-33-000-2020-01136-00
<b>DEMANDANTE:</b>	Orlando de Jesús Bedoya Muñoz
<b>DEMANDADO:</b>	Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
<b>ASUNTO</b>	Revoca y ordena entregar la información solicitada.

### I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a resolver en única instancia el recurso de insistencia presentado por el señor Orlando de Jesús Bedoya Muñoz, remitido a esta Corporación por el subdirector del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca.

### II. ANTECEDENTES

#### 2.1. La petición.

El 2 de enero de 2020 el señor Orlando de Jesús Bedoya Muñoz en ejercicio del derecho de petición, presentó ante la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, escrito pidiendo copia de los actos administrativos que otorgan comisión de servicios y sus prórrogas a favor de los siguientes profesionales universitarios con derechos de carrera administrativa:

- Ing. Heyder Iván Duque Murillo, identificado con cédula de ciudadanía nro. 14.978.166 de Cali, para desempeñarse como director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Buenaventura y posteriormente como director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Tuluá (21 de septiembre de 1998/ 26 de julio de 1999).
- Ing. Alfonso Rojas Palacio, identificado con cédula de ciudadanía nro. 14.978.166 de Cali, para el desempeño del cargo de libre nombramiento y remoción de director

RADICACIÓN : 2020-01136-00  
Medio de control : RECURSO DE INSISTENCIA  
Demandante : ORLANDO DE JESÚS BEDOYA MUÑOZ  
Demandado : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



General de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (marzo 12 de 2003).

## **2.2. La negativa.**

La Subdirección de Gestión Humana del Departamento del Valle del Cauca, mediante oficio nro. 1.110.10-2.79 SADE 451865 de enero 17 de 2019, dio respuesta a la petición anterior, indicando que la información contenida en las historias laborales de los activos, retirados y jubilados del Departamento del Valle del Cauca son de carácter reservado, de conformidad con el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, soportada también por los artículos 4º y 13º de la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012. Por lo expuesto, negó la solicitud.

## **2.3. El recurso de insistencia.**

El peticionario a través de escrito de fecha 05 de febrero de 2020, manifestó no estar conforme con la respuesta brindada, pues la negativa de los documentos no se hizo a través de un auto o providencia motivada y, por lo tanto, solicitó que de estar en la hoja de vida los actos administrativos de comisión de servicios y sus prorrogas los particulares mencionados, se de aplicación al artículo 29 del Decreto Ley 2150 de 1995 y el concepto del Archivo General de la Nación 500636 de 2005.

Así mismo, solicitó se de cumplimiento a los artículos 15, 16 y ss. de la Ley 57 de 1985, remitiéndose al artículo 8º de la Ley 58 de 1982 y 15 de la Constitución Política, de no ser atendida su petición se configuraría el silencio administrativo positivo.

## **III. CONSIDERACIONES**

### **3.1. Procedencia del recurso de insistencia y competencia de esta Corporación.**

El artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establece que toda decisión que rechace peticiones de información por motivo de reserva legal debe ser sustentada, indicando con precisión las disposiciones que impiden la entrega de la información o los documentos. Dicha disposición es del siguiente tenor:

**“Artículo 25.** Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. *Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o*



*documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.*

*La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.”*

Aunque la norma es precisa en señalar que no procede recurso contra la decisión que rechaza la petición de información por motivos de reserva legal, la persona interesada de conformidad con el artículo 26 del CPACA, podrá insistir en la petición ante la autoridad que invoca la reserva, para lo cual deberá surtirse el siguiente trámite:

**“Artículo 26.** Insistencia del solicitante en caso de reserva. *Si la persona interesada insiste en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada”.*

A su vez, el numeral 7 del artículo 151 del CPACA, les atribuye competencia a los Tribunales Administrativos en única instancia, para conocer de los “recursos de insistencia” cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental. Así se establece:

**“Artículo 151.** Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. *Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:*

*(...)*

*7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá. (...)*”

De conformidad con las anteriores disposiciones, esta Corporación es competente para conocer en única instancia del presente “recurso de insistencia”, teniendo en cuenta que el Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional es una entidad del orden departamental y la decisión que rechazó la petición de información invocó un motivo de reserva legal.

### **3.2. Problema jurídico.**

El problema jurídico se contrae a determinar si la información solicitada por el peticionario y que fuera negada por la Subdirección de Gestión Humana del Departamento del Valle



del Cauca, está sujeta a reserva de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley.

Para el efecto, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: I) el derecho de acceso a documentos públicos, II) documentos sujetos a reserva, III) derecho a la intimidad y IV) el caso concreto.

## **I. Derecho de acceso a documentos públicos.**

Respecto del acceso a documentos públicos, la Constitución Nacional establece por principio general, lo siguiente:

***“Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.***

***El secreto profesional es inviolable.”***

Este derecho se encuentra acorde con lo señalado en el artículo 20 de la Carta Política, el cual expresa la facultad que tienen las personas de informar y recibir información veraz e imparcial. Sobre este mismo punto es posible decir que el derecho a la información y el de petición, tienen una estrecha relación, pues el segundo es la garantía de cumplimiento del primero.

Ahora bien, la Ley 57 de 1985 por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales, reguló:

***“Artículo 12.- Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.”***

Se entiende entonces que, por regla general, que los documentos de las entidades públicas pueden ser consultados por cualquier persona, salvo que frente a ellos la Constitución o la Ley hayan impuesto el carácter de reservado, o que tengan relación a la defensa o seguridad nacional. Sin embargo, como bien lo expone la misma normativa, el carácter reservado no puede ser caprichoso, sino estar sustentado debidamente, así lo dice la norma ibidem:

**“Artículo 21º.- La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes.**



*Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente.*

*Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.*

*Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente.” (Subraya fuera de texto)*

Las anteriores determinaciones, fueron recogidas por la Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”, normativa que ilustra con claridad lo atinente al acceso a los documentos.

Es clara la norma, en precisar como principio fundamental y como regla general, que la información se presume pública, exponiendo los artículos 2 y 3 lo siguiente:

**“Artículo 2°.** Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

**Artículo 3°.** Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. *En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:*

**Principio de transparencia.** Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.”

**Principio de buena fe.** *En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará*



*con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.*

**Principio de facilitación.** *En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo*

**Principio de no discriminación.** *De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.*

**Principio de gratuidad.** *Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.*

**Principio de celeridad.** *Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos.*

**Principio de eficacia.** *El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.*

**Principio de la calidad de la información.** *Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.*

**Principio de la divulgación proactiva de la información.** *El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.*

**Principio de responsabilidad en el uso de la información.** *En virtud de este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma...” (Subraya fuera de texto)*

La norma mencionada, conceptualiza el derecho fundamental al acceso a la información de la siguiente manera:





**“Artículo 4°.** Concepto del derecho. *En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.*

*El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.*

**Parágrafo.** *Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada.”*

Así mismo, define que existen diversas clases de información pública, clasificándola el artículo 6, de la siguiente manera:

**Información pública.** Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal;

**Información pública clasificada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley;

**Información pública reservada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño al interés público y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19.

Como bien se dijo anteriormente, es posible que alguna información pese a ser pública puede tener reserva para su divulgación o ser clasificada, y por tanto está exenta del principio general de máxima divulgación. Al respecto la norma citada previó:



**“Artículo 18.** Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. <Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> *Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:*

a) <Literal corregido por el artículo 1 del Decreto 2199 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> *El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.*

b) *El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.*

c) *Los secretos comerciales, industriales y profesionales.*

**Parágrafo.** <Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> *Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable...*

**“Artículo 19.** Información exceptuada por daño a los intereses públicos. *Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:*

a) *La defensa y seguridad nacional;*

b) *La seguridad pública;*

c) *Las relaciones internacionales;*

d) *La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;*

e) *El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;*

f) *La administración efectiva de la justicia;*

g) *Los derechos de la infancia y la adolescencia;*

h) *La estabilidad macroeconómica y financiera del país;*





i) *La salud pública.*

**Parágrafo.** *Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.”*

Finalmente, el artículo 29 de la misma disposición establece que le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial.

En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente.

## II. Documentos sujetos a reserva

De la norma transcrita, se puede colegir que el derecho de acceso a documentos públicos, si bien es la regla general, no es absoluto, y sus límites se encuentran en las excepciones previstas en la Constitución y la Ley.

La Ley 1755 de 2015 “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*” previó lo siguiente:

**“Artículo 24.** *Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:*

- 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.*
- 2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.*
- 3. Los que involucren **derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas**, así como la historia clínica.*
- 4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.*



5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.

**Parágrafo <CONDICIONALMENTE exequible>** Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 **solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.**” (Negrilla fuera de texto)

Este desarrollo legal, obedece no solo a instrumentos internacionales sino jurisprudenciales, es así como la Corte Constitucional sobre la reserva a la información ha emitido, entre otras, las siguientes subreglas:

- “a. Deben estar contenidas de forma clara, expresa, taxativa, previa y precisa en una ley de la república o en una norma con fuerza de ley (Sentencias T – 391 de 2007, T 473 de 1992, T – 511 de 2010).*
- b. Debe perseguir un fin que sea imperativo, definido concreta y específicamente por la autoridad pública, como por ejemplo el orden público, el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica y la defensa nacional.*
- c. Estas finalidades deben ser interpretadas de manera restringida y no se aplican a casos similares por analogía. Así mismo no es suficiente alegar una de estas finalidades imperiosas de forma abstracta, sino que es necesario manifestar la realización de un interés público concreto, específico e imperioso. (Sentencias T – 391 de 2007, T 251 de 2002, C – 872 de 2003).*
- d. Deben ser proporcionales al fin que persiguen. Esto quiere decir que las restricciones deben ser necesarias útiles y proporcionales, en estricto sentido. (Sentencias T– 391 de 2007, T 251 de 2002, C – 872 de 2003, C – 010 de 2010).*
- e. Las respuestas que nieguen el acceso a la información deben ser motivadas y el funcionario público que se ampare en alguna reserva para negar la información debe mencionar de forma explícita la norma constitucional o legal que lo autoriza a hacerlo (sentencias C-491 de 2007, T-074 de 1997).*

Lo anterior, sobre la base que debe prevalecer el principio de publicidad.

### III. Derecho a la intimidad

El artículo 15 de la Constitución Política señala:

*“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.*

*En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.*

*La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.*

La Honorable Corte Constitucional, en auto nro. 134 del 28 de junio de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo, sobre el derecho a la intimidad señaló:

*“(…) Y aunque la peticionaria no solicitó la reserva de su nombre, ni de sus datos personales al momento de interponer la acción de tutela, esta Corporación optará por una solución intermedia entre el conflicto que existe entre el derecho a la intimidad y el principio de publicidad de los procesos judiciales.*

*8. Que por lo anterior, la Sala ordenará que en toda publicación de la sentencia T-226 de 2010 en la página web de la Corte Constitucional se sustituya el nombre de la peticionaria por uno ficticio, al igual que 11 los datos e informaciones que puedan identificarla.*

*La Sala de Revisión ha preferido cambiar el nombre e identificación real de la accionante por datos ficticios, en lugar de sustituirlos por letras – tal como se hizo en el auto 286 de 2010 – para facilitar la lectura de la providencia y la comprensión de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de referencia. Al tratarse de un nombre ficticio, éste se escribirá en la letra cursiva y no se usarán apellidos.”*

El derecho fundamental a la intimidad, como posible excepción al principio de publicidad de los documentos y en general, de todo lo relativo a las actuaciones concernientes a la gestión pública, no existe un parámetro general y previo, del cual se pueda extraer con certeza, los casos en los cuales la tensión entre ambos debe resolverse en pro del derecho a la intimidad y viceversa.



La Corte Constitucional en sentencia T-729 del 5 de septiembre de 2002 con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynett, estableció categorías de información, a partir de las cuales el intérprete judicial, debe hacer la respectiva ponderación y de esta forma establecer en cada caso, cuál de los derechos en colisión debe primar.

Así lo señaló:

*“La información privada será aquella que por versar sobre información personal o no, y que, por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.*

*Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente sobre la información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular –dignidad, intimidad y libertad– se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados “datos sensibles” o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.”*

#### **IV. Caso Concreto**

Descendiendo al caso *sub examine*, debe indicarse que lo solicitado por el señor Orlando de Jesús Bedoya Muñoz, no es otra cosa que los actos administrativos (comisión de servicios para desempeñar otros cargos y sus prorrogas) correspondientes a los señores Heyder Iván Duque Murillo y Alonso Rojas Palacio, empleados de carrera del Departamento del Valle del Cauca, información que tal como lo indicó la entidad al momento de dar respuesta a la petición, tiene el carácter de reservado, según lo consagrado en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

La Ley 1437 de 2011 en su artículo 3º numeral 9º dispuso que: *“las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones notificaciones y publicaciones que ordene la ley”.*

Para darle el carácter de reservado a un documento o información, debe estar previamente consagrado como excepción en la Ley, de lo contrario los documentos deben ser entregados a la persona que lo solicite, incluso deben ser publicados en cartelera y paginas web para su consulta.



Así pues, los actos de nombramiento, actas de posesión, contratos, comisión de servicios, no tienen la reserva legal que manifiesta el Departamento del Valle, pues son actos de vinculación y en ellos no reposan información confidencial, como estado civil, dirección de residencia, gustos, preferencias, hobbies, orientación sexual, conformación de la familia, información crediticia o financiera, ni ningún elemento que pueda afectar la intimidad de los servidores públicos.

Por lo anterior, es un error negar la expedición de la copia de los actos administrativos donde se concede comisión de servicios y sus prorrogas a los señores Heyder Iván Duque Murillo y Alfonso Rojas Palacio vinculadas a la administración, cuando se tratan de documentos públicos sin ningún tipo de limitación o reserva.

De acuerdo con lo preceptuado en la norma, encuentra la Sala que la información solicitada por el señor Orlando de Jesús Bedoya Muñoz, si bien es parte de la hoja de vida de los señores Heyder Iván Duque Murillo y Alfonso Rojas Palacio, no contiene información sensible ni de carácter reservado puesto que se refiere a la comisiones de servicios y prorrogas que se les otorgo por parte del ente territorial Departamento del Valle del Cauca para que ocuparan otros cargos, por lo tanto, se tratan de documentos a los que puede acceder el solicitante

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

## **RESUELVE**

**PRIMERO.- REVOCAR** la decisión adoptada por el Departamento del Valle del Cauca en los oficios del 17 de enero de 2019 y 11 de febrero de 2019, por medio de los cuales negó al señor Orlando De Jesús Bedoya Muñoz, el acceso a la información y documentos solicitados mediante petición del 02 de enero de 2019.

**SEGUNDO.-** En consecuencia, **ORDENAR** al Departamento del Valle del Cauca por intermedio de su representante legal, que en el término máximo de 10 días hábiles, proceda a hacer entrega de la información solicitada por el señor Orlando De Jesús Bedoya Muñoz en la petición del 02 de enero de 2019, esto es los actos administrativos que conceden comisión de servicios y sus prorrogas a los señores Heyder Iván Duque Murillo y Alfonso Rojas Palacio, haciendo la salvedad de que suprima todos los datos que involucren derechos a la intimidad o privacidad.

RADICACIÓN : 2020-01136-00  
Medio de control : RECURSO DE INSISTENCIA  
Demandante : ORLANDO DE JESÚS BEDOYA MUÑOZ  
Demandado : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



**TERCERO:-** Una vez en firme, archívese las presentes diligencias previas las anotaciones de rigor.

Providencia discutida y aprobada en Sala de Decisión de la fecha.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**Los Magistrados,**

**OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**

**OMAR EDGAR BORJA SOTO**

**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

Correos para notificación: [njudiciales@valledelcauca.gov.co](mailto:njudiciales@valledelcauca.gov.co)  
[orlando5-10@hotmail.com](mailto:orlando5-10@hotmail.com)

VoBoSecretario  
ngg